

Mirza, Christian Adel. Capítulo III. Los movimientos sociales: oportunidades de expansión, contribuciones para una nueva democracia desde abajo. Los perfiles de un nuevo paradigma democrático. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias.

CAPÍTULO III

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN, CONTRIBUCIONES PARA UNA NUEVA DEMOCRACIA DESDE ABAJO

LOS PERFILES DE UN NUEVO PARADIGMA DEMOCRÁTICO

Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3.

Disponible en la web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellc.ap3.pdf>

HEMOS CONVIVIDO en un cuarto de siglo de breve historia del subcontinente latinoamericano, que ha sido testigo de convulsiones, promesas, profetas y rebeliones; que vio renacer la democracia en la mayor parte de sus naciones, después de túneles de oscurantismo, caza de brujas, intrigas, desapariciones, ríos de sangre y aromas a camposantos; que asistió a nuevos partos, alumbramientos y deslumbramientos, anotó ilusiones en el carné de vida de sus gentes y creyó resucitadas las expectativas de una vida digna, con justicia y libertad. Es inevitable volver la mirada y quizá redescubrir que la tiranía del tiempo nos sirve de excusa para rememorar sin memoria, ensayar conjeturas y predicciones sobre los hilos delgados de un futuro que se teje en el presente, pero desligado momento a momento de un pasado que pronto se esfuma, desaparece en tiempos en que el tiempo nos exige una velocidad extrema, que empuja a vivir ahora con la incertidumbre del día después, pero con el olvido prematuro del ayer. Y bien, una perspectiva amplia y abarcadora de los movimientos sociales, la democracia y el poder, nos obliga a re-trazar los conductos y sinapsis que nos informan de un pasado, por cierto muy próximo, en clave de continuidad al presente, no exento de disrupciones, yuxtaposiciones y repliegues que asumimos como procesos complejos de construcción y reconstrucción social; a examinar aquellos procesos desde una perspectiva diacrónica y a la vez sincrónica.

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO

Entendemos que, si el *sujeto* ya no es el *pueblo*, que si las clases sociales ya no determinan los ejes del conflicto, que si la democracia ya no puede asegurar la igualdad social y que no hay avenidas que nos dirijan de manera certera e inexorable al mayor bienestar de todos los ciudadanos, se impone (siempre) un análisis riguroso para dar cuenta (examinando, explicando e interpretando) de los cambios políticos, sociales y culturales, desde una mirada panóptica y con un gran angular teórico, aun heterodoxo. No obstante, el abordaje analítico ha exigido realizar una selección de algunos marcos conceptuales y a considerar una pluralidad de enfoques teóricos respecto de la identificación de la acción social colectiva y sus relaciones con la democracia en América Latina, aun a riesgo de no profundizar en muchos de los ricos aportes con que numerosos autores e investigadores han nutrido –con creces– las alacenas del conocimiento desde el campo de las ciencias sociales. En ese sentido, retomamos la noción de *movimiento social* del sociólogo Alain Touraine (1998), más específicamente el concepto de *movimiento societal* (bien diferenciado de los grupos de interés). En un contexto histórico determinado estos movimientos cuestionan las orientaciones generales de la sociedad; sus rasgos específicos los colocan en el terreno de las luchas por la hegemonía sociocultural, interpelando una forma de dominación social concreta. Y en el centro del conflicto el Sujeto (ni la clase, ni la nación, ni el pueblo), que se debate en una tensión permanente entre el universo de la instrumentalidad –el mercado–, y el mundo de la cultura –identidad– asociado al comunitarismo encerrado en sí mismo.

Movimientos sociales y democracia están indisolublemente unidos. Con más precisión, esta democracia implica para el referido autor: control social de la economía, limitación del poder, representatividad de los dirigentes políticos y separación entre el poder temporal y el espiritual. Un análisis de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina, y más particularmente de los incluidos en nuestra muestra, bien pueden ajustarse a las coordenadas enunciadas; así, tomamos tan sólo un ejemplo, el MST de Brasil, que ha desarrollado desde sus propios inicios una identidad bien específica, sin que de ello se desprenda que el movimiento de campesinos, colonos y trabajadores rurales se remita a sí mismo como “un mundo cerrado de intersubjetividades”, ajeno al resto de los movimientos sociales y sin conciencia de “clase”. Hay evidencias de un movimiento social (parte del movimiento societal o aquel que mejor lo representa) por interponer (de manera antagónica) unos modos de producción, tenencia, explotación y distribución de la riqueza radicalmente diferentes de los del capitalismo *agrobusiness* impuesto en los noventa e inspirado en el paradigma neoliberal. Más evidencias encontramos cuando el MST procura y diseña una arquitectura institucional sobre la base de la participación hori-

zonal que sobrevalora los mecanismos de consulta de nivel estadual y municipal; destacando los principios que orientan la configuración de los numerosos núcleos comunitarios y familiares para la producción agraria, la constitución de un soporte cooperativo y asociativo; la conformación de redes educativo-pedagógicas para sus integrantes; la noción de autonomía y respeto a las singularidades en cada nueva experiencia socioproductiva y una praxis que anuda su proyecto social y político al devenir de la democracia brasileña. “Queremos transformar el Estado y la sociedad” es una afirmación común en muchos de sus dirigentes, militantes, de sus miles de pequeños productores, campesinos y colonos, que de una u otra forma han nutrido en lo cotidiano de sus luchas desde la ocupación de tierras, los ayunos y las marchas, una formidable experiencia de articulación social sobre la base de un principio originariamente orientador; la reforma agraria expresa la justicia social anhelada y cuestiona el derecho a la propiedad desde la lógica y el fundamento capitalista. El involucramiento del MST en casi todos los asuntos públicos que hacen a la vida social, económica y política del Brasil le ha otorgado, por derecho ganado en la faena diaria, un sitio privilegiado que convierte al movimiento en un referente ineludible para el conjunto de la sociedad civil, para el Estado y los partidos políticos, aun también para actores de la región y el planeta. El MST es un *sujeto colectivo* (un actor central) que contribuye a la edificación de una “democracia desde abajo”, con señas de identidad, que resiste la imposición de la racionalidad del mercado y que invoca nuevos valores en la cultura del trabajo, de la producción y la distribución; en la solidaridad manifiesta entre ocupantes precarios y colonos, entre mujeres y hombres, entre sus diferentes generaciones, y entre dirigentes y militantes de base.

Desde luego que las contradicciones afloran y los conflictos por el poder no se ausentan; la intervención de los actores políticos también hace mella y no podríamos de manera insensata aventurarnos a “sacralizar” al MST, precisamente por considerarlo un movimiento en juego interactivo y no cerrado sobre sí mismo. El mito de un *movimiento societal* que soluciona y supera –con abluciones mágicas– las perversidades y tentaciones de la racionalidad capitalista, de la que también es tributario, no hace más que perjudicar (desdibujando) una imagen mucho más multifacética y policromática. El desgarramiento del *sujeto* (al cual siempre Touraine hace referencia) en el *sujeto (colectivo)* afirma una unidad inseparable que concierne tanto al sujeto individual como al colectivo. Lejos de resolver las contradicciones entre el mundo de la instrumentalidad (el mercado) y el mundo de las identidades culturales (comunidad), el MST provee de ámbitos, recursos, espacios para asumirlas crítica y no impávidamente, promoviendo *sujetos* activos en la superación de aquellas contradicciones, y no individuos pasivos, en una

dialéctica *sujeto individuo-sujeto colectivo* que construye identidades y subraya la importancia de lo cotidiano, del diálogo entre subjetividades, sin imponer lógicas autoritarias homogeneizadoras en torno a valores, normas y conductas. El legado social del MST más significativo, si se quiere, refiere más a una metodología (praxis) de superación de la alienación consumista, y la puesta en práctica de nuevas relaciones entre sujetos.

De otra parte, los formatos democráticos se verán afectados, pero también sus contenidos, siempre que se comprenda que la relación biunívoca entre Estado y sociedad no está sólo mediada por el sistema de partidos, reconociendo que hay espacios legítimos y válidos (sin presumir la sustitución de los movimientos sociales en las funciones polivalentes de los partidos políticos) para el aporte sustantivo de los movimientos sociales, en la refundación democrática en Brasil y en América Latina. Caminos de confluencia –repetimos– sin evadir los conflictos reales y no meramente simbólicos (entre clases, entre dominados y dominadores) puede haber, y de hecho los hay, entre movimientos sociales y partidos políticos de signo progresista para la construcción colectiva de nuevas relaciones de poder –insistimos– en el marco de reglas y normas de convivencia y respeto a la pluralidad. Tanto en lo atinente al control social de la economía (lo que necesariamente supone un cambio profundo de los actuales mecanismos en el control del capital, la asignación de recursos presupuestales del Estado, el control público del manejo de intercambios comerciales, la disposición y afectación de los recursos naturales, entre tantas otras dimensiones de la economía), como en cuanto a la limitación del poder y la representatividad de los dirigentes políticos, de acuerdo con las condiciones que debiera tener la democracia contemporánea (según Touraine, 1998; 1999), nos hallamos en un punto bien lejano. El panorama de las democracias latinoamericanas está alejado de las condiciones apuntadas, lo que no significa la imposibilidad de revertir las tendencias oligopólicas y monopólicas en la concentración de poder (y los recursos para ejercerlo), ni la oclusión de todas las vías para remover los obstáculos para su transformación. Si nuevamente volvemos a ejemplos concretos, la CONAIE de Ecuador nos ilustra profusamente acerca de sus posturas antisistémicas de las cuales derivan los argumentos para refundar la democracia en el sentido de Touraine. Cambiar los armazones institucionales, repensar el Estado como un todo y no exclusivamente en tanto burocracia o dispositivos de control, repensar el papel de la sociedad y las estrategias de inclusión (integración) social, la consideración de la plurinacionalidad en la cual se asentaría el nuevo esquema institucional, en fin, son todos elementos suficientes que perfilan a aquel movimiento social como la posible columna vertebral de un movimiento societal en Ecuador, luego

de haber protagonizado y liderado tres levantamientos indígenas en la última década del siglo XX.

La perspectiva temporal nos retrotrae a la década de los ochenta, cuando las democracias restauradas insuflaban esperanzas a las ciudadanías latinoamericanas. Dos décadas después se añoran los tiempos de efervescencia y emoción por el reencuentro con las libertades, por cierto no concedidas gratuitamente sino arrebatadas a fuerza de luchas populares con costos altísimos y heridas aún no totalmente restañadas. La cuestión central, a inicios de una nueva centuria, es cómo estas democracias aún frágiles, inestables y extremadamente vulnerables pueden recomponerse a partir de nuevas matrices sociopolíticas, sin someterse a turbulencias cada vez más frecuentes y desintegradoras. Precisamente, las aportaciones del sociólogo Manuel Antonio Garretón (2002) aluden a la descomposición de las matrices que históricamente determinaron o condicionaron la naturaleza de los movimientos sociales y los ejes de la acción social colectiva, selladas por la impronta nacional-popular y estadocéntrica. Las estructuras (sobre todo económicas) ya no constituyen, a su juicio, una categoría suficiente para explicar e interpretar adecuadamente los procesos sociopolíticos que se escribieron en las páginas de la historia reciente en el continente. En su lugar no se hallarían categorías sustitutivas aptas para un análisis riguroso, pero sí al menos nociones y conceptos que aluden a los cambios continuos, a la consideración de las subjetividades y la dimensión cultural y de las identidades.

Si coincidimos con Garretón en su afirmación de que las estructuras económicas ya no explicarían de manera central el conflicto y la movilización, así como que las nuevas realidades latinoamericanas nos revelan otros ejes de la acción social colectiva, debemos ir a la búsqueda de las señales, de los anuncios que los propios movimientos sociales nos ofrecen para intentar una lectura interpretativa de los fenómenos, hechos, situaciones y procesos que han marcado los itinerarios desde los años ochenta hasta los inicios del nuevo siglo. Es cierto que emergió una pluralidad de nuevos movimientos y actores sociales, no sólo con un discurso renovado, sino con unas prácticas sociales referenciadas en identidades socioculturales, a la cotidianeidad de las vivencias singulares, a la revalorización de las dimensiones subjetivas de las luchas sociales, y una reivindicación implícita –si se quiere– de una autonomía de la sociedad civil, reclamada ante la omnipresencia del Estado y de las instituciones sociopolíticas que regularon durante años la convivencia democrática (sindicatos, corporaciones empresariales, partidos políticos). Nuevas problemáticas emergieron o, más precisamente, se hicieron más visibles: los derechos de la mujer, el respeto a la diversidad cultural, la cuestión étnica y la exclusión histórica de los pueblos indígenas, los asuntos vinculados al medio ambiente y la depredación de

los recursos naturales, la participación vecinal, entre tantos otros ejes en torno a los cuales se rearticulaban viejos y nuevos conflictos. Ahora bien, el trabajo perdió terreno y el movimiento sindical se debilitó; sin embargo, los movimientos rurales y campesinos recobraron el protagonismo, el movimiento estudiantil en muchos sentidos se redefinió, el movimiento indígena se reconfiguró, la territorialización de la acción social colectiva se convirtió en una tendencia bien evidente. Los trabajadores desocupados, aquellos que parecían ya condenados al ostracismo social, despojados de sus derechos y apartados de los circuitos del mercado, irrumpieron en la escena pública con voz potente y firme.

Las limitaciones o ausencia de incentivos significativos para la acción social colectiva, según la afirmación de Garretón, no parece completamente adecuada para caracterizar las etapas de mayor turbulencia y movilización social que se vivieron en el subcontinente en los últimos diez o quince años. Tal vez aletargados durante cierto tiempo, los pueblos latinoamericanos volvieron sin embargo a cobrar impulso y protagonismo a través de sus manifestaciones orgánicas más visibles: en Argentina, durante la década menemista, la irrupción del piqueterismo y de otras expresiones novedosas del movimiento de trabajadores (caso CTA); en Brasil, el creciente desarrollo de los Sin Tierra (además de nuevos actores sociales a nivel vecinal, territorial); en Ecuador, el despliegue del indigenismo; en Paraguay, sobre todo en el último lustro, la rearticulación del movimiento campesino; en Uruguay, la confirmación de un papel relevante aún del movimiento sindical y el fortalecimiento del movimiento cooperativo de vivienda (FUCVAM).

Todo ello nos exige repensar que, en rigor, efectivamente ha habido vectores o incentivos poderosos que estimularon la acción social colectiva: la frustración de ciertas expectativas respecto de los rendimientos de las democracias restauradas, la aplicación sistemática y contundente de un conjunto de políticas económicas y sociales inspiradas todas en el paradigma neoliberal, el desencanto en alguna medida de las instituciones democráticas y de los partidos políticos, la ofensiva para implantar los proyectos de integración a la “americana” (ALCA), los intentos de criminalización de la protesta social que empujaron a vastos sectores de las clases más pauperizadas a redoblar sus acciones, la aceleración del proceso de mundialización cultural, económica y financiera. Desde luego, estas movilizaciones y sus movimientos representativos no han replicado los formatos de protesta y acción colectiva de los años sesenta o setenta; son otros mecanismos y modalidades, pero no puede negarse su regularidad y presencia no tan efímera como algunos sospecharon. La instalación de la cuestión étnico-cultural en Ecuador no culmina con la aceptación de unos dispositivos institucionales para atender la causa indígena; antes bien, el proceso sostenido y continuo de la CONAIE (principal artífice de la

protesta en la década del noventa y a partir del primer levantamiento indígena) no podría entenderse sin considerar que su foco de preocupación trasciende largamente la defensa de los derechos de las nacionalidades indígenas ecuatorianas, para situarse en el campo de la confrontación con el poder político institucional y por la redistribución de la renta, por la reestructuración del Estado y la refundación democrática sobre nuevos principios. Por tanto, no se trata exclusivamente de reclamos sectoriales, de reivindicaciones por tierras despojadas, de demandas puntuales, sino de una verdadera lucha por la hegemonía (congruente con la emancipación) en la producción de orientaciones estratégicas, valores y normas, de largo aliento y cuyo efecto se haría sentir en las instituciones de la democracia.

Los cuatro asuntos (señalados por Garretón, 2002) por los cuales habrían de transcurrir los ejes del conflicto social aluden a: la democratización política; la democratización social; la reconstitución de las economías; y la reformulación de la modernidad. La democratización ha sido y es, sin duda, un proceso lento y complejo que recorre la pampa argentina, cruza la cordillera andina y atraviesa la selva amazónica; de sur a norte en el subcontinente, va dejando las huellas aún endebles de un sentimiento colectivo que comparten los pueblos, la ciudadanía o la sociedad civil, según sea el lente teórico que utilicemos. Sea como fuere, los sistemas democráticos han reincorporado enormes contingentes de latinoamericanos al calor de la *politeia*; pero el carácter polisémico de la democracia inflige un duro revés a quienes presuponen concepciones congeladas, cristalizadas y por tanto restringidas exclusivamente a la comprensión de aquellos que pretenden ser sus especialistas, tanto en su diseño como en las formas de aplicarla.

Las democracias recortadas, acotadas a los procedimientos regulares y estandarizados, dejaron la sensación de vacío. Esto es en cierto modo lo que acaeció durante toda la etapa post-autoritaria. En casi todos los países donde hubo dictaduras, la democracia perdida y arrebatada debía ser recolocada como principal reivindicación de la ciudadanía. A fuerza de movilizaciones, resistencias, negociaciones y, sobre todo, de mucho sacrificio humano, retornaron aquellas democracias para encarnar la voluntad general de reasumir los destinos nacionales. Después sobrevino la frustración. El proceso de democratización política dejaría, poco tiempo después, la impresión de insuficiencia. Es decir, los mecanismos reinstaurados –elecciones sistemáticas, garantías para la libre competencia, participación ciudadana, libertades de expresión, canales abiertos de expresión de la protesta y el debate – fueron evaluados como insuficientes. Porque, para citar el primer ejemplo, en Argentina hubo un gran resplandor que aturdió, creando espejismos y realidades virtuales; para una proporción importante de la sociedad aquellos sueños de gloria y opulencia parecían materializarse. Sin em-

bargo, de la euforia optimista se pasó a la furia de la frustración. La democracia apenas recuperada se volvió a tambalear. En el año 2001, cuando el entonces presidente de la Rúa decretaba el estado de sitio, las multitudes salieron a la calle a preservar la democracia herida. La democratización política y su consolidación es para Argentina un asunto pendiente; mejor dicho, en construcción.

Si uno de los ejes del conflicto y de la acción social colectiva es la democratización política, queda claro que es un eje común a los siete países mencionados, ciertamente en grados bien diferentes. Sostenemos que la crisis en Argentina fue más institucional que económica, sin soslayar de ninguna manera las bases para que así lo fuera (descomposición social, pauperización, corrupción, ajustes fiscales, dismantelamiento del aparato productivo, especulación financiera, crisis de confianza política, descreimiento y pérdida de legitimidad en los institutos representativos). En efecto, los valores señalados en materia de decrecimiento de la confianza en el sistema político, y especialmente en los partidos políticos, marcan un cambio de rumbo que está en curso. Al momento de escribir estas palabras, el presidente de los argentinos, Néstor Kirchner, da muestras de querer modificar ciertos clavajes perversos que hicieron de la política –y, de hecho, del régimen democrático– un dominio donde las elites se regodearon para sacar provecho particular con desprecio por la suerte de las mayorías ahora pauperizadas. Restan todavía algunos años más para afianzar un modelo alternativo. Entre los aspectos que decidirán el futuro de aquella nación, habrá que mencionar la capacidad de articular un proyecto donde la democracia política incorpore la voz de los ciudadanos, no sólo mediada por los partidos políticos, sino por un conjunto de actores sociales, movimientos emergentes y sólidos que han reclamado ser partícipes activos en la construcción de una democracia renovada. No puede soslayarse de ninguna manera la prueba irrefutable de la vocación profundamente democrática²³ de la sociedad argentina, puesta en evidencia a fines del año 2001, cuando se opuso al estado de sitio saliendo a las calles en defensa del orden constitucional, las libertades y la democracia.

En tanto, en Uruguay, el sistema político está transitando por una fuerte transformación de las hegemonías históricas. Luego de la

23 Aun reconociendo una gama variada y matizada respecto a la conceptualización del régimen democrático que desde los movimientos sociales se expresa, algunos de nuestros interlocutores se manifestaron en abierta crítica, desprecio y menoscabo a ciertas instituciones democráticas (Parlamento, partidos políticos, Poder Judicial); para otros, en cambio, si bien anotaron las insuficiencias y la desnaturalización de la función pública en democracia, el mal ejercicio de los cargos de representación y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana, la afirmación de la democracia como sistema de convivencia (a ser transformado o reformado) es concluyente.

restauración democrática también se vivieron etapas de frustración. Sin embargo, aun interpelado, el sistema de partidos se mostró dúctil y permeable a las variaciones de las expectativas sociales. De todos modos, los niveles que hemos examinado en referencia a los grados de confianza en las instituciones democráticas deberían constituir una señal de alerta para los actores políticos, a fin de prevenir el ahondamiento de la débil credibilidad en el sistema del partidos, exigiendo por otro lado una labor madura y persistente de los movimientos sociales en la consolidación de su papel en la construcción de los nuevos escenarios democráticos en vísperas de un posible cambio de las orientaciones gubernamentales a partir de las elecciones de octubre de 2004. En Venezuela, la fragilidad y extrema vulnerabilidad del actual formato institucional augura un tránsito aun muy dificultoso hacia una consolidación y estabilidad democrática, allí donde los movimientos sociales todavía se mantienen alineados en uno y otro campo de las fuerzas políticas en contienda. En Ecuador, la salida del movimiento indígena del gabinete del gobierno de Lucio Gutiérrez, seis meses después de asumir el mismo, pasando a la oposición, hace compleja la tarea de lograr el equilibrio constitucional mientras se mantenga una situación que no contempla las demandas genuinas de cambio para las mayorías excluidas. En Brasil se delinearon nuevos rumbos, no exentos de contradicciones entre los movimientos sociales y el gobierno liderado por su presidente Lula da Silva. En Paraguay, la hegemonía de un partido en el poder condiciona fuertemente los procesos de una democratización que suponga una mayor apertura y pluralidad política, profundizando las actuales tendencias renovadoras. Finalmente, en Chile, el acuerdo de dos partidos que hoy comparten responsabilidades en el poder podría verse en problemas si se confirmara la evolución de un lento pero firme crecimiento de la derecha, en condiciones de arrebatarle la hegemonía de casi más de una década. En todos estos países, el conflicto estará sin dudas determinado por la capacidad de ahondar los procesos de democratización, so pena de reingresar a un estado de mayor fragilidad institucional, en razón de lo cual resulta imprescindible examinar cuidadosamente la relación entre el sistema político y los movimientos sociales a largo plazo.

La democratización social, también planteada como uno de los ejes del conflicto por Manuel Garretón, refiere a la reivindicación de los derechos sociales; en ese sentido, sostuvimos la estrecha relación entre crisis económica, pauperización, desigualdad y protesta, movilización y lucha social. Resulta claro que, cuando se traspasan los límites de tolerancia que una sociedad "admite" en términos de brecha socioeconómica, y se cruza el umbral mínimo de bienestar, se produce una reacción inmediata de respuesta en clave de resistencia, de oposición y reivindicación. En estas condiciones se reducen considerablemente las

posibilidades para el consenso a partir de la negociación, empujando a la polarización social que puede generar bloqueos en el sistema político. Sin embargo, es preciso establecer que, en la mayor parte de los movimientos sociales que analizamos, el discurso y la práctica contestataria no se remiten exclusivamente a las lógicas de la demanda y negociación (aun teniendo presente que ellas son indispensables para obtener las conquistas sociales); antes bien, elaboran y formulan alternativas y opciones que sobrepasan largamente las fronteras de los intereses sectoriales y específicos o corporativos, para colocarse en el plano de los proyectos (y metaproyectos) nacionales de transformación estructural, que incluyen las dimensiones políticas, sociales, culturales, institucionales y económicas.

Si recurrimos al relevamiento de casos examinados, advertimos las similitudes de perfiles entre varios movimientos sociales de diversa naturaleza y origen, pero que cuentan en su haber con caracteres comunes: la intención de trascender los impulsos reivindicativos de corto alcance para ubicar demandas mucho más integrales; una capacidad orgánica importante en términos de estructuras y funcionamientos regulares, sistemáticos y sostenidos; discursos que incluyen asuntos públicos de interés colectivo; estrategias y tácticas combativas, así como un repertorio de modalidades innovadoras de lucha que se compatibilizan con propuestas articuladas y el despliegue de capacidades de negociación e incluso de participación en la gestación y gestión de políticas públicas. Las identidades de los movimientos sociales se construyen con relación a sí mismos y a los otros actores sociales y políticos. Los desocupados y piqueteros, las ocupaciones y los sin tierra, los trabajadores y las marchas, los cortes de ruta y los indígenas, todos defienden principios comunes: la exigencia de democratizar la sociedad, el Estado y, por qué no, el mercado, en el entendido de que esto último significa la no sumisión a los supuestos designios invisibles de la oferta y la demanda. Es desde esta perspectiva que se resignifica la defensa de los derechos humanos y particularmente los derechos sociales, el acceso a los servicios de salud, vivienda, alimentación, empleo, a las coberturas sociales múltiples que debieran dar protección social en contingencias imprevisibles (discapacidad permanente o transitoria, ancianidad, enfermedad).

Cuando ni el Estado ni el mercado aportan respuestas consistentes, los propios movimientos sociales han autogenerado las soluciones, sean de emergencia o de efecto sostenido. Esta ha sido otra manera de construir identidades socioculturales, procurando el respeto a las comunidades y envolviendo con redes solidarias a quienes buscaron o encontraron aquellas protecciones básicas que el Estado no les supo ofrecer. Las huertas comunitarias, las ollas populares, los comedores infantiles, los centros barriales, las cooperativas de vivienda, de pro-

ducción y trabajo, los talleres artesanales, las aulas pedagógicas en los campamentos de colonos, las escuelas son, entre otras, las respuestas que los movimientos sociales les han dado a sus integrantes. Esta democratización social, que continúa, se inscribe en una estrategia de democratización política; ambas dimensiones presuponen cambios sustantivos, y no soluciones mitigatorias. El proceso de contramarcha respecto de la implantación del paradigma neoliberal puede tomarse como un síntoma del restablecimiento de unas condiciones mínimas perdidas en más de una década en la mayor parte de las naciones evaluadas; pero la democratización social seguirá siendo –sin duda– uno de los ejes fundamentales de la acción social colectiva, en la medida en que los actores sociales están prevenidos respecto de las deudas pendientes y a la necesidad de una actuación eficaz, continua, ininterrumpida a efectos de obtener logros plenamente satisfactorios –por cierto, en función no sólo de las *performances* de las respectivas economías sino, y sobre todo, de la suerte que corran los procesos de inclusión e integración social fundados en nuevos contratos sociales. Nuevos fracasos en esta dirección harían revertir peligrosamente los avances políticos obtenidos en los últimos veinte años de democracia en América Latina.

La expansión de la ciudadanía y la remisión de la exclusión social (además de la superación de la pobreza) es un requisito imprescindible –*sine qua non*– para el fortalecimiento democrático, ciertamente atado –en el infortunio o en el éxito– al despliegue de capacidades sustantivas de participación ciudadana, al pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales, a la *incorporación de sujetos* activos y no de objetos de derecho. En ese sentido, los movimientos sociales adquieren relevancia superlativa, constituyéndose también en verdaderas escuelas de democracia, de construcción y expansión de ciudadanía.

La reconstitución de las economías en su gran mayoría dañadas por efecto de las crisis de inserción en la economía mundial es otro de los desafíos que enfrentan las naciones latinoamericanas. Abandonado y perimido el modelo desarrollista, las economías nacionales se debaten entre la supervivencia en el contexto de la globalización –que realza las cualidades competitivas singulares– y la búsqueda afanosa de alternativas estratégicas novedosas (ya no de modelos sustitutivos) que recuperen los activos degradados o sencillamente perdidos, para enfrentar de manera consistente los retos de una mundialización y regionalización que favorecen la interdependencia más que las salidas unilaterales o autárquicas. En este sentido, los movimientos sociales han apreciado estos desafíos, incorporándolos explícita o implícitamente a la panoplia de núcleos del conflicto que unas veces ha reordenado y articulado actores políticos, sociales, agentes económicos en función de plataformas (forzadamente) consensuadas, y otras veces ha establecido las rígidas demarcaciones entre los actores y sus respectivos intereses de clase.

Lógicamente, las interacciones constantes no omiten las diversas racionalidades en cuestión, desde las propias del Estado débil pero no ausente (habíamos advertido que este sigue siendo el *locus* preferencial del poder, aunque haya perdido centralidad), pasando por las demandas por inclusión y participación de los movimientos sociales, y las pretensiones de mediación y representación de los partidos políticos.

Si bien debe reconocerse –tal como sugiere Garretón– “la preeminencia de las luchas defensivas, a veces en la forma de revueltas salvajes, otras a través de la movilización de actores clásicos ligados al Estado en defensa de sus conquistas previas” (Garretón, 2002), justo es reconocer otras luchas sociales que trascienden los avatares particularistas, para situarse en el plano de las “reivindicaciones” más universales en una nación o comunidad. Los levantamientos indígenas en Ecuador expresaban, al final del recorrido, no sólo los anhelos de justicia para las etnias excluidas, sino la intención evidente de una transformación radical de las reglas de juego y de la correlación de poder existente en aquella nación. Asimismo, las ocupaciones de tierras en Brasil y la exigencia de la reforma agraria resultan tan sólo la punta del iceberg de una plataforma que abarca también y sobre todo la cuestión de los modos de producción capitalista en el agro, nuevas culturas del trabajo y de apropiación del excedente, valores y normas alternativos y contrapuestos a los dominantes en la sociedad brasileña. Los piqueteros y también las asambleas barriales exigen cautela para no caer en el estereotipo y la falsa imagen de multitudes revoltosas que impiden el paso de vehículos colocando piquetes por doquier, sólo por Planes Trabajar o subsidios para desempleados. Las innumerables experiencias de trabajo, de mallas solidarias tejidas y entrelazadas por identidades compartidas, subjetividades y “sentidos de acción”, nos permiten escudriñar minuciosamente en un movimiento social que, aunque algo disperso y fragmentado, denota una voluntad integradora, tanto cultural como políticamente. El movimiento cooperativo de adscripción territorial en Uruguay cuenta a su vez con acumulaciones empíricas que han removido algunos supuestos fuertes del mercado y cuestionado (alterando) los fundamentos de la propiedad capitalista, en ensayos de autogestión social y participación ciudadana. Las disputas de los mapuches en Chile aluden también a la tenencia de la tierra, a ciertas modalidades depredadoras de la biodiversidad, al atropello de las culturas indígenas y la no consideración de valiosos aportes en materia de producción agraria en comunidad.

Ciertamente, la búsqueda de estrategias de desarrollo genuino (para muchos endógeno) necesita de la pluralidad de actores y revierte a la necesaria articulación entre sociedad, mercado y Estado. Hay quienes preferimos señalar, sobre todo, la importancia de repensar un nuevo *contrato social*, que podría implicar renunciamientos pasajeros o

sobreesfuerzos de unos sectores sociales más que otros, pero que debe anteponer ante todo los intereses de las enormes mayorías pauperizadas (por razones éticas, políticas y económicas), privilegiando a los sectores pobres, a las clases subalternas por encima de la recuperación de las capas medias, aunque en dicho contrato social se deba incluir a los trabajadores y empleados (públicos y privados, del campo y las ciudades), empresarios medianos y pequeños, productores rurales y profesionales, imputando inevitablemente el mayor costo a los sectores de mayores ingresos. Desde nuestra óptica, la recuperación de las economías nacionales y regionales no podrá seguir midiéndose exclusivamente con el indicador de crecimiento (PBI), sino especialmente en función de cómo se redistribuye el ingreso, la riqueza generada por el colectivo social. El conflicto social y la acción colectiva se refieren (aunque no de manera exclusiva) a la *distribución de la renta y del poder* (en el marco de una fase del capitalismo concentradora y más excluyente), aun admitiendo que las estructuras económicas ya no determinen los ejes principales y debamos rastrear en dimensiones socioculturales, psicológicas, de las subjetividades y los sentidos de acción –que nos propone Garretón– del mundo del sujeto desgarrado –que nos sugiere Touraine. No desconocemos la relevancia de otros asuntos que han venido a la palestra pública a recobrar validez y vigencia, tales como los derechos de las mujeres y sus luchas contra toda discriminación (es a la vez un problema vinculado al ejercicio del poder); las batallas por el reconocimiento de la diversidad de carácter étnico, con base en la cultura y los valores, con soporte territorial; la defensa del medio ambiente (que mucho tiene que ver con las formas alternativas de producción, que cuestionan el uso cada vez más extendido de los transgénicos y la destrucción de la biodiversidad).

De todos modos, el debate instalado en el campo económico no admite reduccionismos simples; ya no se trata de producir más bienes, sino sustancialmente de cómo se logra incrementar dicha producción, y principalmente cómo se la distribuye con equidad. La desafiliación masiva que se ha generado en todo el subcontinente no es producto de la casuística, ni tampoco podría afirmarse su irreversibilidad; coloca ambos dilemas –el de la recuperación económica y el de la exclusión social– en estrecha simbiosis. Las movilizaciones, las protestas y luchas sociales recorren el espinel de los reclamos y demandas por trabajo y empleo endosados a un “modelo” económico a todas luces fracasado (al menos en cuanto a resolver su continuidad y perpetuación en la lógica de acumulación capitalista y, sobre todo, en cuanto a su incapacidad para obtener impactos de mejora del bienestar), interpelando viejos paradigmas y enfoques del desarrollo en América Latina.

La reformulación de la modernidad para Garretón supone la lucha en torno a la construcción de identidades y el rescate de la diversidad

cultural; en esta dirección, la ruptura de matrices históricas instituyentes conlleva la pérdida de referencias y prefiguraciones para incursionar en nuevas combinaciones entre varias dimensiones: la racionalidad científico-tecnológica, la dimensión expresiva y subjetiva, las identidades y la memoria histórica colectiva. El despunte de los movimientos indígenas en Ecuador, México, Bolivia y Chile, entre otras naciones, replanteó precisamente los supuestos de la integración modernizadora de las décadas precedentes, que cristalizaban determinados patrones y pautas de constitución de actores y sujetos desconociendo las particularidades culturales de comunidades ya desplazadas, confinadas o aculturadas en las grandes urbes latinoamericanas. Las sublevaciones indígenas en Ecuador, lideradas principalmente por la CONAIE, subrayan la noción de pluriétnicidad en contraposición a un supuesto modelo único de ciudadano (uniformemente unificado y representado por una síntesis armónica entre aportes culturales diversos), pero despeja inmediatamente la idea de una “guetización” de comunidades. Simultáneamente, en su trayectoria desde el primer levantamiento, el movimiento indígena ha propuesto un contraproyecto plurinacional y la transformación del Estado “nacional-burgués”, que implica una profunda reestructura institucional. Pero no sólo el movimiento indígena rescata la diversidad y el respeto multicultural; también los movimientos urbanos, como el de los MTD en Argentina, remueven las pautas de convivencia y los valores hegemónicos, para producir en el discurso, en los formatos organizativos, en su capacidad de integrar experiencias innovadoras, una ética renovada, en la cual reposa su práctica de lucha y resistencia. Respecto de Brasil, hemos argumentado de manera reiterada en esta dirección. En Uruguay, las experiencias del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua consignan, a su vez, modalidades solidarias y autogestivas. Los mapuches chilenos suman sus voces para advertir acerca de los falsos mecanismos de inclusión social, toda vez que se los prive no sólo de sus tierras enajenadas por el capital multinacional, sino también del papel fundamental en la preservación de sus identidades comunitarias.

De los movimientos de trabajadores que hemos examinado, la CTA no se ajusta al formato tradicional y asume una fisonomía también diversificada en función de los sectores que la componen (sindicatos y desocupados, comunidades barriales y vecinales, organizaciones de defensa de los derechos humanos, cooperativas), generando asimismo alternativas que procuran reconfigurar las pautas de construcción de una modernidad singular, el aliento a la revaloración del trabajo como vertebrador de las relaciones sociales y económicas, pero a partir de ensayos solidarios y de mutuo apoyo. En este contexto adquieren preponderancia los jóvenes y las mujeres, por cuanto aquellos se rearticulan ya no sólo alrededor de consignas gremiales, sino con una presencia

importante en el desarrollo de los movimientos sociales (tal vez porque, a diferencia del sistema político que los excluye con indiferencia, encuentran en el seno de los movimientos sociales oportunidades de reasumir un papel protagónico en las movilizaciones, con voz y posibilidades efectivas de participación), mientras que las mujeres gravitan de manera extraordinaria en la conformación de redes de sostén, en la presencia a la par en las luchas y protestas, así como en los niveles de conducción y liderazgo social en las comunidades y organizaciones sociales de base.

Los procesos de mundialización alcanzan a proveer de insumos culturales y comunicativos y de repertorios (de lucha, protesta y propuesta) variados y heterogéneos, tales que favorecen –aún más– los intercambios entre sociedades y comunidades latinoamericanas, acercando unos y otros actores sociales desde experiencias singulares (no necesariamente extrapolables), pero con una disposición al mutuo enriquecimiento. Efectivamente, no podría asegurarse la existencia de una ruta o itinerario común y único de modernización para el subcontinente, pero en su lugar, probablemente, sí una tendencia a la constitución de una amalgama polivalente y dinámica, en cambio permanente y sujeta a los aportes creativos de los sujetos colectivos e individuales.

Examinemos ahora sucintamente los marcos teóricos de la *teoría de la movilización política*, más precisamente, desde los intentos de conjugarla con los aportes del paradigma culturalista de los Nuevos Movimientos Sociales (incorporados como procesos enmarcadores), a partir de los señalamientos de McAdam, McCarthy y Zald (1999). Conviene recordar al respecto que dichos autores subrayan tres aspectos o dimensiones relevantes para el estudio de los movimientos sociales: la estructura de oportunidades, las estructuras de movilización y los procesos enmarcadores. En este sentido, se consideran de manera desagregada algunas variables en el primer ítem: grado de apertura del sistema político o acceso al sistema de partidos, estabilidad de las alineaciones entre elites, alianzas entre elites, capacidad represiva y de implementar políticas públicas del Estado y la estructura del conflicto (según la debilidad o fortaleza de los oponentes). Para la dimensión de estructuras de movilización se toman en cuenta las diferencias entre infraestructuras de organización (repertorios modulares), la cultura organizativa y su relación con los movimientos sociales. Finalmente, para los procesos enmarcadores se analizan los marcos culturales, la intervención de los medios de comunicación y la construcción del repertorio de argumentos, entre las temáticas más importantes.

En cuanto a las estructuras de oportunidades, convengamos que, al mismo tiempo que se consideran como datos “preexistentes”, también se ven afectadas por las actuaciones que las modifican; vale decir que los movimientos sociales crean asimismo nuevas oportunidades para la

acción colectiva. Respecto del grado de apertura del sistema político y, más específicamente, a la permeabilidad del sistema de partidos, es posible identificar en los modelos institucionalizados una menor apertura que en los modelos incoativos. Los sistemas de partidos apañados en la competencia electoral han amarrado fuertemente adhesiones y electorados a los actores *dentro* del sistema; la incorporación de nuevos competidores (movimientos o partidos políticos) en las circunscripciones institucionalizadas ha resultado difícil, al menos en escenarios de relativa estabilidad. Si registramos los ejemplos de Uruguay, Chile, Argentina (hasta fines de la década del noventa) y Venezuela (hasta mediados de los noventa), en todos los casos el sistema de partidos fue capaz de obtener mayoritariamente el apoyo de la ciudadanía, mediando y canalizando eficazmente sus intereses y demandas sectoriales. En tanto, los sistemas políticos incoativos e inestables, con niveles bajos de enraizamiento con organizaciones sociales, fueron más propensos a nuevos ingresos en sus respectivos sistemas de partidos, más permeables a la inclusión de actores políticos no tradicionales. El caso de Ecuador es tal vez el más claro –sobre todo si analizamos la evolución del número efectivo de partidos (promedio del período 1996-2003 = 5,5)– en que se ha observado la irrupción de nuevas formaciones y agregaciones políticas con relativo éxito dentro del sistema de partidos. Brasil también ha visto modificarse de manera sustantiva su mapa político, sobre todo a partir de mediados de los ochenta. Por otra parte, tanto en Argentina como en Venezuela se suscitaron eventos y procesos que los dejaron al borde de la categoría de sistemas incoativos; en el primer caso, como resultado de la debacle económica e institucional tras las repercusiones de la estrepitosa caída del Plan de Convertibilidad y las demoleadoras consecuencias sociales y económicas por la aplicación del recetario neoliberal más ortodoxo y obsecuente.

Al comparar dichos procesos con el advenimiento de nuevos movimientos sociales o el resurgimiento de los movimientos denominados “clásicos” o “históricos” (obreros, estudiantes y campesinos), observamos de una parte las dificultades para consolidar nuevos actores sociales en el período post-autoritario inmediato en Chile y Uruguay, y la debilidad para configurar movimientos autónomos en Venezuela y Argentina en el período inmediato de su restauración democrática (salvando algunas excepciones). De otra parte, tanto en Brasil como en Ecuador hay evidencia suficiente para dar cuenta de la fuerza y el protagonismo del movimiento social de raíz territorial campesina y de raíz étnico-cultural respectivamente, aun considerando los vaivenes del movimiento sindical, todavía muy poderoso en Brasil y bastante menos en Ecuador. La permeabilidad del sistema de partidos no se refiere únicamente a la entrada y salida de actores políticos, sino también a la suficiencia para absorber y captar los reclamos, reivindicaciones y pro-

puestas provenientes del campo social; vale decir que mecanismos más o menos estatuidos en los sistemas políticos institucionalizados habilitaron la incorporación de aquellas demandas de forma sistemática y, si se quiere, legitimada.

Con relación a la estabilidad de las elites y sus alianzas, cabe comentar que, en los sistemas políticos institucionalizados, el grado de estabilidad y alineamiento de las elites fue mucho mayor que en los sistemas incoativos; al menos se percibe una capacidad significativa del sistema de partidos en términos del disciplinamiento y el mantenimiento de las lealtades básicas (no se observaron corrimientos importantes, salvo en algunos casos en que la conformación de nuevos bloques políticos se nutrió parcialmente de desprendimientos de partidos históricos o de larga data, como el ejemplo uruguayo). Las alianzas entre políticos y actores económicos se sostuvieron por agrupamiento de intereses estratégicos, en clave de alianzas de clases. En la mayoría de los ejemplos que comparten los rasgos típicos de sistemas institucionalizados, las alianzas entre clases –grupos de interés– y partidos políticos de tipo *catch all* o policlasistas, u otros claramente clasistas, las coaliciones y pactos se mantuvieron más o menos consolidados durante largo tiempo. Basadas en sectores ganaderos y agroexportadores o actores empresariales (del capital industrial primero y del capital financiero después), las alianzas entre elites fueron soportes para la gobernabilidad democrática (salvo durante los períodos autoritarios en los cuales el papel esencial estuvo centrado en las Fuerzas Armadas) hasta bien entrada la década del noventa, etapa en la cual aquellas alianzas relativamente estables sufrieron también los impactos de un modelo altamente concentrador, expulsando a actores de cierto peso económico y social.

De alguna manera, la rotación de aliados puede ayudar a interpretar mejor los vacíos producidos en algunos países y el desfibramiento de pactos tácitos o explícitos. En los casos de Brasil (el debilitamiento de sectores industriales nacionales durante la implementación de políticas de cuño neoliberal en los noventa adquiere aristas singulares, empujando a las elites a reorientarse hacia partidos políticos que les aseguraban el mantenimiento de políticas acordes a sus intereses) y Ecuador (sumido en la completa dependencia y dolarización de su economía, donde los militares retomaron un rol significativo junto con sectores de la oposición política y social al menos hasta la ruptura de la alianza entre Gutiérrez y el movimiento indígena) las alianzas dejaron la sensación de ser menos estables, aunque comparten también lógicas de alineamiento relativamente similares. El caso paraguayo es bien diferente: la impronta autoritaria y militarista pervive aún, y perfila las alianzas entre el Partido Colorado hegemónico y las elites terratenientes.

En Chile, desde la restauración democrática, la Concertación refleja el acuerdo entre los dos partidos (DC y PS) que conforman la

mayoría en el gobierno. En Venezuela, hasta el colapso del sistema de partidos, predominó el acuerdo de Punto Fijo entre las elites socialdemócratas y socialcristianas. En Uruguay, también desde la recuperación de las instituciones democráticas, se asistió a la configuración de una coalición de gobierno cada vez más explícita (Partido Colorado y Partido Nacional). Dichas alianzas, que incluyeron a sectores empresariales, los medios de comunicación más potentes y en algunos casos también las elites militares, fueron apenas interrumpidas por los ciclos electorales. En Venezuela se produjo un brusco cambio y reordenamiento de las alianzas a partir del fin del puntofijismo y la victoria electoral del presidente Hugo Chávez; allí es evidente la conformación de una oposición que cuenta entre sus protagonistas a la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), al menos en su expresión oficial, y FEDECÁMARAS, la más importante asociación de empresarios. Los movimientos sociales en Uruguay, Chile y Venezuela se restringieron a los campos más específicos de las demandas y las luchas sectoriales, no obstante verificarse en algunos casos movilizaciones más abarcadoras. Deben reconocerse, de todos modos, las diferencias sustantivas entre actores más o menos autónomos, y otros más vinculados a las matrices originarias comunes con partidos políticos históricamente asociados al poder institucional. En Argentina, la emergencia y el desarrollo de nuevos movimientos sociales se verificó durante las postrimerías del gobierno menemista, aunque la CTA inició su proceso de maduración a principios de los noventa. Es interesante analizar, de otra parte, la evolución del MST, que enfrenta a la alianza entre terratenientes y latifundistas con los partidos de la derecha brasileña.

Los contextos políticos en los cuales las alianzas se solidificaron y los alineamientos se hicieron más estables estuvieron caracterizados por la constitución de movimientos consolidados en la arena pública, pero con escasa capacidad de convocar nuevas alianzas o campos alternativos de envergadura, al menos hasta los noventa. La situación se revierte sobre fines del siglo pasado, si consideramos los altos costos sociales de la aplicación de políticas económicas que afectaron de manera generalizada y extendida intereses de amplios sectores sociales (trabajadores, campesinos, pequeños y medianos empresarios, productores rurales, profesionales independientes, entre otros), facilitando la articulación de alianzas entre actores opositores al modelo hegemónico. Sin embargo, tenemos la impresión (en razón de una falta de información más precisa y afinada) de que las alianzas estables y fuertes entre elites políticas y corporativas tienden a restringir o frenar el desarrollo de movimientos sociales innovadores y más autónomos.

Con relación al Estado y su capacidad represiva y de implementar políticas públicas; más allá de la potencialidad coercitiva de los aparatos estatales en todos los países, señalamos diferencias importantes.

En Uruguay y Chile la etapa post-autoritaria dejó atrás la fisonomía de un Estado policíaco y ferozmente represivo; aunque ha habido hechos violentos durante los últimos diez años, ellos no superan el carácter de excepción (arrestos a dirigentes mapuches, represión a manifestantes estudiantiles en Chile, violencia desatada a inicios de los noventa en Uruguay, y acotada a un episodio específico). En Venezuela, la sangrienta represión durante el *caracazo* y los saldos que arrojan las manifestaciones posteriores nos informan de una impronta represiva significativamente alta (incluso considerando la intervención reciente de fuerzas policiales en Caracas que no responden totalmente a los sectores chavistas), no obstante lo cual no podría atribuírsele el rasgo de Estado represor. En Brasil y Ecuador la violencia desatada contra los movimientos sociales ha sido importante, en el primer caso en complicidad con grupos armados que responden a los *fazendeiros*, en otros, directamente por el uso de la fuerza policial (sobre todo contra las ocupaciones “ilegales” promovidas y organizadas por el MST). En Ecuador, la represión tuvo como blanco predilecto al movimiento indígena, con la intimidación, persecución, encarcelamiento de dirigentes y líderes sociales. En Argentina, la situación desencadenada por la grave crisis social y económica adquirió ribetes dramáticamente represivos: muertos y heridos, presos y perseguidos. La criminalización de la protesta se hizo mucho más patente en aquella nación. Sin embargo, tanto en Argentina, como en Brasil, Ecuador e incluso Paraguay, los movimientos sociales no se replegaron; al contrario, sus luchas violentas alimentaron la mística de la sublevación y la resistencia, haciéndolos más fuertes y otorgándoles aún más legitimidad social de la que disponían.

La capacidad de instrumentar políticas públicas desde el Estado se distingue también por la propia y particular historia de la formación de las burocracias, modernizadas o aún sujetas al clientelismo y el patrimonialismo. Uruguay y Chile vuelven a compartir rasgos comunes en este aspecto, independientemente de las orientaciones diversas. En ambos países, las políticas públicas constituyeron referencias insoslayables para el conjunto de actores sociales y políticos, formando parte constitutiva de la contienda por la asignación de recursos, beneficios e incentivos. En Argentina, las vicisitudes electorales y político-institucionales redujeron las capacidades del Estado para mantener políticas públicas coherentes y congruentes entre sí –al menos eso fue lo ocurrido entre los años 1999 y 2002–, capacidades que fueron cabalmente recuperadas en el año 2003, con un nuevo gobierno electo democráticamente.

El asunto central, obviamente, alude a los intersticios, vacíos o contradicciones ocasionados por la falta de consistencia y coherencia de parte de los gobiernos cuando asumen una de sus funciones básicas. Las políticas públicas no son tampoco unilateralmente diseñadas

y ejecutadas por el Estado, sino que recogen a su tiempo la confluencia de demandas (corrientemente opuestas, o mutuamente excluyentes) e intereses inmersos en procesos conflictivos de negociación, lobby y concesiones recíprocas. En la medida en que los actores sociales no sean escuchados y su participación se vea limitada o recortada, en tanto el Estado no responda eficaz y eficientemente, el espacio de acción para los movimientos sociales se ensancha. Resulta claro que las intervenciones fuertes, sostenidas y sistemáticas del Movimiento Sin Tierra en Brasil responden a la incapacidad (por falta de voluntad expresa o por presiones de los grupos de interés en pugna) del Estado en implementar la reforma agraria reclamada y reconocida como necesaria por la mayoría del sistema político. Actualmente, y aun con un gobierno de izquierda, el MST se moviliza activamente en nuevas ocupaciones de tierras, como respuesta a las demoras y el entencimiento del proceso. Cuando en Argentina el Estado no asume responsabilidad plena por las graves carencias alimenticias y sanitarias de su población y no despliega acciones rápidas, eficaces y acordes a la magnitud de las circunstancias, la sociedad civil, y especialmente los movimientos sociales, asumen lo que en rigor no deberían: la cobertura básica de satisfactores para los más empobrecidos, amén de tomar iniciativas en el campo laboral y educativo, razones agregadas para obtener espacios de relevancia en el escenario público.

Respecto de la debilidad y fortaleza de los actores en pugna, ya nos hemos referido a las articulaciones entre elites, asociadas a clases y sectores sociales, en función de su posición dominante o subalterna en el marco de una estructura capitalista, y en un contexto de aplicación del paradigma neoliberal. El papel decisivo de los militares tuvo un signo radicalmente diferente a los períodos autoritarios tanto en Ecuador como en Venezuela, ahora inequívocamente situados en la defensa de la democracia, demostrando mantener un poder real en la política nacional. En Chile, Argentina y Uruguay la cuestión de los derechos humanos, a más de tres lustros de haber superado las dictaduras militares, persiste como problema no completamente resuelto, aunque desde luego mucho se ha avanzado, sobre todo en el enjuiciamiento de los militares en Argentina y la labor en torno a la Comisión para la Paz en Uruguay. En diferente grado, los militares se mantienen públicamente “apartados” de la esfera política, lo que no supone su anulación como actor social institucional. En Paraguay, en cambio, el rol del Ejército es preponderante en cuanto a inclinar la balanza hacia un sector u otro del coloradismo en el poder.

Por otro lado, la disminución del peso relativo de la clase obrera en casi todos los países examinados resulta un dato ineludible para entender el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Al mismo tiempo, algunos sectores empresariales “perdedores” en la ecuación

resultante por la apertura de las economías, la desprotección indiscriminada de las industrias y la producción nacionales, aún debilitadas, se volvieron más propensos a ensayar aproximaciones a movimientos sociales más combativos y antineoliberales. Si es cierto que el trabajo perdió terreno frente al capital, es indispensable diferenciar los grupos y sectores socioeconómicos que fueron los más beneficiados durante la aplicación ortodoxa de las recomendaciones emanadas del Consenso de Washington. Las elites tecnocráticas vinculadas al capital financiero vernáculo y multinacional (sistema bancario, administradoras de fondos previsionales), los actores económicos que concentraron aún más las propiedades agropecuarias, en algunos casos el sector exportador y en otros los representantes de grandes cadenas comerciales (hipermercado), también actores políticos de la derecha que fueron apoyados por los centros hegemónicos del capitalismo, todos fueron y son actores con poder real y simbólico. Del otro lado se encuentran los movimientos sociales sostenidos por desocupados, pequeños productores rurales empobrecidos, por trabajadores organizados en renovados movimientos sindicales, por indígenas y campesinos desplazados de sus tierras, por nuevos actores ecologistas, actores territoriales y cooperativistas, por importantes movimientos de derechos humanos, agremiaciones estudiantiles, por una miríada de organizaciones no gubernamentales de promoción, por redes locales de solidaridad; en suma, una ciudadanía expresada por un conjunto multifacético de actores que conjugaron en determinadas circunstancias y coyunturas su voluntad colectiva de resistir un modelo opresivo –cultural y económicamente–, aun a sabiendas de las asimetrías profundas entre actores.

Las oportunidades también se abrieron, todas las veces que el sistema político se fisuraba por efecto directo de las crisis prolongadas, y los fracasos económicos y sociales de las políticas de inserción mundial. De este modo, una lectura de los fenómenos y acontecimientos en Argentina, desde la articulación original de la nueva central sindical (CTA), pasando por la expansión del piqueterismo y la explosión vecinal en torno al asambleísmo de base territorial, nos permite captar la generación de oportunidades políticas como reacción a la refractaria postura de las elites partidarias, parlamentarias y estatales frente a las amenazas de caos económico y desestabilización institucional. La generación de las oportunidades para la acción social colectiva no se produce *ex nihilo*; las ciudadanías perciben las fisuras, los espacios abandonados, los campos propicios para cultivar enfoques y visiones contrahegemónicas, estrategias de lucha y resistencias, pero también una gama ancha de dispositivos de mitigación o compensación de las desigualdades provocadas por la mercantilización del bienestar. La convergencia en plataformas, coordinaciones y articulaciones amplias y abiertas compensa las debilidades intrínsecas de los movimientos sociales.

En lo relativo a la infraestructura organizativa y a la cultura organizacional (estructura de movilizaciones), parece indicado subrayar que en los países de tradición gremial y asociativa, con desarrollo importante en los movimientos denominados *clásicos*, fermentaron iniciativas orgánicas novedosas; las sociedades se tapizaron densamente de núcleos activos e innovadores. Hemos relatado con detalle las características peculiares de los movimientos sociales en la dimensión organizacional, recurriendo a una paleta simple de tres matices –grado de organicidad alto, medio y bajo– que pone a prueba sus posibilidades de pervivencia e impacto en la esfera pública. Los niveles de mayor grado de organicidad predominan en actores sociales de raíz sindical y territorial; aun así, como elemento adicional, la plasticidad (ductilidad para adaptarse a los cambios y variaciones coyunturales) puede contribuir a explicar cómo un actor social de grado medio en sus formatos y estructuras orgánicas alcanza a plasmar estrategias y acciones exitosas. Es el ejemplo de los MTD, a los cuales oportunamente les adjudicamos un nivel medio en función de su relativa dispersión y atomización, pero que sin embargo han contado con una extraordinaria fuerza de movilización y convocatoria. Inversamente, los grados más altos de organización no suponen automáticamente mejores capacidades de convocatoria y movilización, ni tampoco aseguran una autonomía plena o radical. En todos los ejemplos analizados, la disponibilidad y uso adecuado de los recursos (materiales, económicos, simbólicos, políticos) constituye un factor de éxito.

La cultura organizacional en una sociedad ejerce influencia en las modalidades asumidas. Así, las experiencias de los Centros Culturales Mapuches abrieron en Chile los canales para la organización y visibilidad del conflicto étnico-social. Las comunidades indígenas asentadas en tradiciones e identidades galvanizadas durante décadas en Ecuador sostuvieron las formas organizativas que la CONAIE construyó pacientemente para una eficaz articulación del movimiento indígena. Los Sin Tierra en Brasil (MST) rescataron buena parte de las formas familiares de producción y fueron promoviendo opciones cooperativas y formatos horizontales de participación. La CUT en Brasil anudó su estructura orgánica al espíritu asociativo en defensa de los derechos sindicales en las fábricas y grandes concentraciones industriales. El desarrollo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua tuvo en Uruguay anclaje territorial y se apoyó en las matrices sindicales para poner en marcha sus experiencias de autogestión, en estrecha relación con los barrios y comunidades vecinales (de profusos historiales de nucleamientos y organizaciones) donde se afincaron. En síntesis, resulta pertinente y útil una mirada desde la cultura organizacional como componente de la estructura de movilización, a condición de complementar e integrar

otros vectores (económicos, de clase, políticos y psicosociales) que integren un análisis históricamente contextualizado.

Por último, se tendrán en consideración los marcos culturales y el repertorio de argumentos (procesos enmarcadores), así como la intervención de los medios de comunicación. De acuerdo con las matrices histórico-culturales en casi todos los países incluidos en el estudio, se ha apreciado una difusión de patrones de modernidad muy semejantes: Uruguay, Chile, Argentina y Venezuela (aunque con matices) por un lado, y con diferencias importantes Brasil, Ecuador y Paraguay por otro, lo que no implica presuponer itinerarios similares.

Sin embargo, la impronta nacional, popular y estadocéntrica, que según el enfoque de Garretón ya está desestructurada, no impide rescatar y traer a colación algunos rasgos característicos del modelo de integración y modernización. Entre estos rasgos destacamos: la implantación a nivel político-institucional de democracias (relativamente débiles) de cuño liberal, con acento en un régimen presidencialista y la existencia de garantías para un sistema de partidos competitivo (todas las naciones incluidas en el presente estudio se caracterizaron por registrar alternancia en el ejercicio del gobierno, con la excepción de Paraguay, que ha transcurrido desde hace más de cuatro décadas por el andarivel de la hegemonía unipartidista), y que procuraba un equilibrio con el Parlamento.

También subrayamos la prevalencia de una racionalidad positivista liberal en materia de derechos y obligaciones cívicas, un arquetipo desarrollista que se intentó consolidar sobre la base del pacto capital-trabajo y un desarrollo científico-tecnológico más adaptativo que innovador, una educación y formación elitista pensada para cubrir los relevos de las burocracias y reproducir los profesionales y puestos de trabajo calificados o semicalificados, con frecuencia sin perspectiva estratégica; un *Welfare State* a medio camino que supuestamente daría cobertura y protección desde el Estado paternalista a los ciudadanos más desprotegidos; finalmente, una mirada demasiado focalizada en las pautas de consumo occidentales.

La ola de reformas en todos los planos –económico, social, político, cultural– que se impusiera a despecho de las acumulaciones preteritas en prácticamente todo el subcontinente coadyuvó a liquidar los basamentos de aquellos perfiles de modernidad. La reconstrucción de nuevas rutas de modernidad se asemeja actualmente a aquellos laberintos recubiertos de espejos por los cuales se avanza sin la certeza de encontrar las salidas, a veces inmovilizados por el reflejo de nuestra propia imagen (cargada de nostalgia y añoranza), en ocasiones ya francamente deformada. En este principio de siglo, los movimientos sociales vienen a ocupar un lugar esencial, porque redescubren identidades “ocultas” o invisibles en el marasmo globalizador; la estructura de oportunidades

se aprovecha cuando deja una sensación de vaciamiento y convoca a las sociedades latinoamericanas a recomponerse ellas mismas, tal vez a reinventarse, a reaccionar positivamente produciendo nuevas pautas de modernidad, más adecuadas, genuinas y creativas que imitativas. Estos grandes agujeros negros exigieron la recreación incluso de modalidades de lucha, protesta y resistencia, pero, a diferencia de sus antecesores, los movimientos sociales de fines de siglo incorporaron propuestas de la más variada naturaleza. El constructo argumental de los movimientos sociales expresado en el discurso hace referencia a una reapropiación de valores (acaso perdidos u olvidados) de la memoria colectiva, de las fuentes originarias, combinadas con orientaciones normativas que alcanzan puntos culminantes en las manifestaciones autogestionarias y más radicalmente autonomistas, que albergan la horizontalidad y la consideración de lo cotidiano, de lo subjetivo, de las emociones y sentires compartidos; que recoloca el centro de atención y preocupación en el sujeto en comunidad.

En innumerables ejemplos, los movimientos sociales han divulgado mensajes antineoliberales, anticapitalistas y antisistémicos. Los argumentos son simples: el fracaso del modelo anterior es también el fracaso de una cultura pretendidamente homogénea que ocultaba la real y verdadera diversidad y riqueza sociocultural, al mismo tiempo que subsumía los intentos de emancipación por temor a la desestabilización social y política. Los levantamientos indígenas en Ecuador y la visibilidad del conflicto mapuche abrevan en identidades sojuzgadas, en culturas a veces usurpadas y otras veces maniatadas cuando no se supo entender sus mensajes; es sobre todo el movimiento ecuatoriano indígena el que alcanza a emitir señales contundentes en la dimensión cultural, modificando efectivamente el marco cultural para exigir y trabajar en pos de la transformación radical del Estado y la sociedad. Lo mismo sucede con los Sin Tierra en Brasil, que relanzan desde la plataforma de la reforma agraria una consigna de más largo aliento exactamente en la misma dirección. Los piqueteros argentinos, los campesinos paraguayos, los cooperativistas uruguayos, en fin, buena parte de los movimientos sociales que hemos considerado apuntan a lógicas de cambio, pero tejen en su seno ensayos de lo que debería cambiar, cómo y hacia dónde. Valores de solidaridad y cooperación en lugar de competitividad, de horizontalidad y participación en lugar del burocratismo y la delegación, la autonomía en vez de las decisiones heterónomas; esto es en definitiva lo que va forjándose en el plano de los marcos culturales, en los que no puede menospreciarse el papel de los *mass media*, cuando son apreciables en ocasiones la manipulación de la información y los flujos de comunicación masiva –habida cuenta de los enormes avances tecnológicos– que son filtrados o “traducidos” por expertos, profesionales o simplemente inescrupulosos.

Los medios de comunicación no sólo juegan un rol de difusores de información sino también de formadores de opinión pública; es desde esta perspectiva que en ocasiones se percibe cierto estereotipo de los movimientos sociales, muchas veces acentuando las facetas violentas o trasgresoras, antes que ameritar el análisis más objetivo y riguroso. Queremos despejar cualquier suspicacia hacia la labor incansable de los medios, y sobre todo los periodistas; no pensamos de manera perversa que todos los medios de comunicación estén sujetos a intereses siempre mezquinos, meramente económicos o ligados a las oligarquías enquistadas en el poder. Pero ello no obsta a ponderar con seriedad y rigor sus incisivas influencias, así como su vinculación inocultable con determinados grupos económicos y corporativos. Así pueden observarse los *clusters media*, que concentran periódicos, canales de televisión, emisoras de radio y se asocian a cadenas internacionales o redes empresariales en subsectores de actividad económica no necesariamente conexos con la producción cultural e informativa. Asimismo, desempeñan un papel muy trascendente en determinadas circunstancias, como fue el caso de los principales canales de televisión privados en Venezuela durante el golpe cívico-militar al presidente Hugo Chávez, en alianza con FEDECÁMARAS y la oposición de algunos partidos políticos. No disponemos de datos fehacientes y exhaustivos de la situación en todos los países considerados; tampoco fue este nuestro foco de preocupación, aun cuando merece acotarse –a modo de ejemplo– que en el caso uruguayo las condiciones de control de los medios son casi oligopólicas: tres o cuatro grupos económicos privados son propietarios de televisoras (por aire y por cable), radios (FM y AM), periódicos y otros medios de prensa, publicidad y producción en la industria de las telecomunicaciones. El acceso a los medios depende indudablemente de los criterios empresariales, pero también de criterios vinculados a sus orientaciones políticas, en la medida en que sus lazos son más estrechos con determinados partidos, sobre todo con los dos partidos tradicionales de la derecha y centroderecha. Los movimientos sociales no cuentan con recursos suficientes para la edición masiva, pero sí utilizan medios alternativos (prensa local, radios comunitarias, Internet y boletines digitales), aunque en ocasiones ven soslayadas o minimizadas sus protestas o propuestas sociales.

Finalmente, no tenemos la certeza de que múltiples y plurales actores sociales, movimientos sociales (en plural), se encuentren en busca del Movimiento Social (en singular), tal como lo dejara planteado Garretón; tampoco la seguridad de haber identificado el *sujeto central* o los sujetos en procura de un principio central constitutivo. Coincidimos con el autor cuando señala:

[Es] improbable que haya un sólo sujeto o Movimiento Social central o actor social o político en torno al cual se genere un campo de tensiones y contradicciones único que articule los diferentes principios y orientaciones de acción que surgen de los ejes de democratización política, democratización social, reestructuración económica e identidad y modernidad (Garretón, 2002).

Sin embargo, las tendencias del cambio de siglo permiten vislumbrar desafíos y dilemas que exigen al conjunto de actores contribuciones sustantivas, desprendimientos del pasado y miradas desprejuiciadas. Las democracias han sido interpeladas, tanto por las formas que fueron definiendo sus relacionamientos con los sujetos constituyentes, como en los contenidos elitistas que se apartaron de los mandatos populares, sea por convicción o por intereses sectoriales. El análisis precedente no puede estar desprovisto de una lectura ideológica. Los conflictos que se configuraron en estos años recientes nos dan la pauta de los fallos de un determinado modelo distributivo y su dislocamiento, así como los aprendizajes para la necesaria recomposición del consenso social, pero sin desechar en nuestras interpretaciones sociológicas y políticas la consideración de la oposición de clases y grupos sociales enfrentados en el marco de una fase capitalista fuertemente concentradora, que condiciona los alineamientos de las elites, las estrategias y tácticas del enfrentamiento. Ya no cabe tampoco el fácil reduccionismo que coloca en una vereda al pueblo y en la otra a la oligarquía; las realidades y procesos contemporáneos, complejos y contradictorios, en contextos de globalización y afirmación de la hegemonía imperial de una superpotencia a nivel planetario, nos informan de marchas y contramarchas en el campo de los movimientos sociales.

Lo cierto es que, tras examinar más de una decena de casos y una variedad de situaciones que encuadraron el análisis de las relaciones entre actores sociales, sistemas políticos, Estado y democracia, arribamos a una conclusión provisoria: los movimientos sociales latinoamericanos han podido desencadenar procesos extremadamente complejos y aún vulnerables²⁴, en un sentido de afirmación democrática, que a su paso también aportaron modalidades innovadoras en materia de orga-

24 Recuérdese la defensa de la institucionalidad democrática ante el Decreto de Estado de Sitio en Argentina en el año 2001; el levantamiento indígena en Ecuador y el respeto al orden constitucional durante la caída de Mahuad en enero de 2000; más recientemente, la forzada renuncia de Sánchez de Lozada en Bolivia, en octubre de 2003, con participación protagónica del movimiento campesino y la aceptación del relevo por parte del vicepresidente; la defensa de las instituciones democráticas en Venezuela por parte de numerosas organizaciones sociales ante el golpe de Estado en abril de 2002; la resistencia en tiempos de dictaduras militares del movimiento sindical en Chile y Uruguay.

nización y gestión del conflicto social. Dichos aportes los ubican como portadores de discursos más omnicomprendidos y menos recortados o adscriptos a los lugares comunes de la demanda particularista.

Hemos aportado suficientes argumentos que realzan la perspectiva ética y deontológica que aquellos movimientos sociales les propusieron a las ciudadanías. Asimismo, pensamos que la diversidad de prácticas sociales que conjugaron la reivindicación legítima de contra-proyectos societales –más universales por definición–, con reclamos específicos, ha demostrado la enorme potencialidad que tienen los movimientos sociales en el sentido de formular proposiciones plausibles vinculadas a la renovación de las democracias en América Latina.

Finalmente, resulta fundamental rescatar el planteo de la mayoría de los movimientos sociales examinados de asociar la exigencia de una efectiva integración social de las grandes mayorías sumergidas en la pobreza y la indigencia con la condición de recrear y reformular el sentido de la política. Es por ello que con insistencia sostenemos la probabilidad (y necesidad) de construir nuevos paradigmas democráticos “desde abajo”, desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil reencontrada con su plena y reconquistada soberanía ciudadana. Es probable que en esa ruta los movimientos sociales encuentren algún principio constitutivo central: retomar los destinos de su historia, construir democracias inclusivas, asumir plenamente el desafío de ser sujetos.